

SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA (EX SENAME)


DESCRIPCIÓN BOLETÍN 11176-07

REFERENCIA	Crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas y modifica normas legales que indica
INICIATIVA	Mensaje presidencial
ORIGEN	Cámara de Diputados
MINISTERIOS	De Hacienda, De Desarrollo Social y De Justicia y Derechos Humanos
INGRESO	4 de abril de 2017
ARTICULADO	<p>34 artículos permanentes y ocho transitorios; de los artículos permanentes, 33 se incluyen en un TÍTULO I DEL SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA DE NIÑOS Y NIÑAS, con los siguientes 10 párrafos: §1° Naturaleza y objeto (arts.1° a 3°); §2° Principios orientadores (arts.4° a 7°); §3° Funciones y Organización (arts. 8° a 11); §4° De la Protección especializada (arts. 12 y 13); §5° De los estándares y de la acreditación de entidades, prestadores y programas de protección especializada (arts. 14 a 16); §6° De la supervisión y evaluación de la protección especializada (arts.17 a 21); §7° De la Administración Provisional o de Cierre (arts. 22 a 28); §8° Del Patrimonio (art. 29); §9° Del personal (arts. 30 y 31), y §10 Disposiciones finales (arts.32 y 33); el TÍTULO II contiene el artículo 34 que introduce, en 41 números, modificaciones a la ley 20.032 sobre subvenciones</p>

OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD

Aunque existe un gran consenso sobre la necesidad de generar medidas adecuadas para prevenir, proteger y reparar el daño que presentan los niños que han sufrido abandono, abuso y otras circunstancias. El proyecto de ley, sin embargo, que se ocupa del Servicio de Protección (separadamente de la reinserción de los menores infractores de ley, que otro proyecto) no asegura que se logre mejorar la calidad de los programas y la gestión de las instituciones.

Tal como se verá, el proyecto del Servicio de Protección genera una serie de nuevas exigencias a las instituciones privadas que no se condicen con las exigidas a las instituciones que son administradas directamente por el Estado, y tampoco mejora la calidad ni asigna más recursos a los programas ofrecidos. Así, se genera una discriminación en contra de los niños atendidos por las instituciones privadas.

Por lo anterior, preocupa que el foco nuevamente se ponga en proteger y promover la intervención que realiza el Estado, en desmedro del importante rol que realiza la sociedad civil al Sistema de la Infancia. En la práctica, esto último genera una de las mayores injusticias al discriminar tanto en recursos y preocupación que reciben los niños que son asignados a las entidades acreditadas, en relación a los que asisten a los programas administrados directamente por el Estado 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

Se crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de niños y niñas como servicio público descentralizado; su objeto es la protección especializada, entendida como aquellas prestaciones dirigidas a restituir el ejercicio de los derechos vulnerados de niños y niñas debido a abuso, maltrato y trata, a explotación sexual y laboral infantil, a abandono cuando carezcan de cuidados maternos o paternos; y a atender los niños y niñas sujetos de adopción.

Dentro de los principios orientadores de la acción del Servicio, se establece que se propenderá a ejercer sus funciones de una manera compatible con el goce del niño o niña al derecho a la vida familiar. Entre sus funciones cabe señalar la de dictar normas de carácter general basándose en los estándares establecidos por la Subsecretaría de la Niñez (que se viene creando en otro proyecto de ley, que se encuentra en segundo trámite en el Senado). Esta Subsecretaría, ente eminentemente político, fijará los estándares que cumplirán las entidades que presten servicios de protección especializada, y que constarán en un reglamento del Ministerio de Desarrollo Social y De Hacienda.

El Servicio tendrá un director nacional y direcciones regionales.

La protección especializada se divide en:

- 1) Cuidado alternativo de tipo residencial o familiar.
- 2) Ambulatoria de reparación y restitución de derechos.
- 3) Adopción.

Habrà un Registro con la información recibida por concepto de protección especializada.

El Servicio supervisará técnica, administrativa y financieramente el cumplimiento de los estándares y las normas de carácter general en la ejecución de los proyectos de protección especializada y revisará las condiciones en que se encuentren los niños y niñas sujetos de prestaciones especializadas de protección de derechos y, especialmente, de aquellos que se encuentren sujetos a cuidados alternativos de tipo residencial o familiar.

El incumplimiento por parte de las entidades o prestadores acreditados de las obligaciones establecidas en los convenios o en las normas vigentes dará lugar a la imposición de sanciones por parte del Servicio, las que podrán ser de multa, término del convenio, inhabilitación hasta por dos años y pérdida de la acreditación. También señala el procedimiento para su aplicación por el Servicio y reclamación ante la corte de apelaciones. Adicionalmente, en caso de incumplimientos

de la entidad acreditada se establece el procedimiento para la designación del administrador provisional.

El personal del servicio estará afecto al Estatuto Administrativo y a la Escala Única de Sueldos del sector público.

Se introducen numerosas modificaciones a la ley que establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Sename y su régimen de subvención ■■■

IV. COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL

ENTORNO

NORMATIVO

El proyecto de ley sobre el Servicio Nacional de Menores (SENAME) está inmerso en un universo normativo bastante complejo y de antigua data. Sin remontarse demasiado en el tiempo, cabe recordar que la ley 16.520 de 1966, facultaba a la Policía de Menores de Carabineros de Chile para recoger a los menores “en situación irregular” que estuvieran necesitados de asistencia o protección (artículo 15, inciso segundo, letra a). En ese contexto, lo irregular decía relación con una situación extra familiar que, por distintas razones, había generado en el menor un grado de desprotección que hacía peligrar su futuro y lo exponía a la mendicidad y demás circunstancias asociadas. Lo irregular es, entonces, la ausencia de una familia que lo acoja.

Esta concepción comenzó a cambiar, primero fuera de Chile, con la dictación, en 1989, de la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño (esto es, el menor de 18 años), cuyo texto posteriormente ratificado por Chile se publicó en el Diario Oficial el 27 de septiembre de 1990 (Dfo. 830 del mismo año, de RR.EE). Como su nombre lo indica, se ha cambiado el enfoque desde la “situación irregular” a los “derechos del niño”, que, en cuanto puedan ser

vulnerados dan origen a diversas medidas de protección.

En consonancia con la antedicha Convención, se presentó a trámite legislativo un proyecto de ley sobre Garantías de los Derechos de la Niñez (boletín 10315-18). Este proyecto, presentado en septiembre de 2015, fue despachado por la Cámara de Diputados al Senado para su segundo trámite constitucional. El proyecto crea un Sistema de Protección Integral de los Derechos del Niño de acuerdo a una Política Nacional de la Niñez, supeditada a los recursos que el país disponga para ello. La materialización de esta Política se realizará a través de lo que el proyecto de ley denomina como “Plan de Acción”, el cual contendrá, al menos: a) Los programas o líneas programáticas que lo integran; b) Las acciones y medidas específicas a ejecutar; c) Los plazos de ejecución; d) Los órganos responsables; e) Las metas para sus acciones y medidas, y f) Los indicadores necesarios para su evaluación.

Este proyecto sobre garantías tiene una fuerte orientación hacia la acción del Estado y reduce la responsabilidad familiar. Además, crea un sistema en que la protección de los derechos del niño estaría a cargo de dos entidades del Estado; por un lado, el Ministerio de Desarrollo Social, que es un ente de carácter político-administrativo; y por otro lado los Tribunales de Familia, que son los encargados actualmente de la protección de los derechos del niño, y tienen la característica de ser un organismo de carácter judicial especializado.

ENFOQUE GENERAL

Previo a comentar el proyecto de ley, parece necesario tener en consideración cuáles serían los principales elementos que impulsaron la separación del SENAME en dos servicios, uno orientado a la protección y el otro, a la reinserción. Si bien hay una crisis institucional que lleva varios años, la muerte, no hace mucho, de dos niños, volvió a visibilizar las presuntas irregularidades y negligencias que estaban ocurriendo al interior de los centros del SENAME.

A partir de entonces se generaron una serie de investigaciones, entre las cuales, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados dio cuenta de la muerte de más de 800 niños en alguna entidad del SENAME o dependiente, durante las dos últimas décadas¹. Adicionalmente, se evidenció un importante déficit en especialistas para atender casos más complejos², recursos insuficientes³ para los organismos colaboradores (que, tal como se mencionó, pasarían a denominarse “entidades acreditadas”), una importante demora en los tiempos de adopción⁴, entre otras deficiencias.

1 EMOL (03 de Octubre de 2016). “SENAME confirma la muerte de 865 niños a cargo del organismo en últimos once años”. Emol.cl.

2 El déficit de profesionales en los servicios de protección de menores producto de una demanda que excede ampliamente las dotaciones de la red de atención SENAME, siendo esto identificado por mismo los funcionarios (Gómez y Haz, 2008) como por el informe de la Comisión Especial Investigadora del Funcionamiento del SENAME (2014).

3 Focus (2013). “Evaluación del Gasto Institucional del Servicio Nacional de Menores”. Focus Estudios y Consultorías. Abril 2013.

4 Fundación Chilena de la Adopción (2016). “El derecho a ser Hijo/a...”. Presentación a la Comisión Investigadora del SENAME en la Cámara de Diputados. 12 de diciembre 2016.

En cuanto a la falta de recursos, es importante señalar que a pesar que los niños derivados a los centros estatales podrían corresponder a casos más complejos, los organismos de la sociedad civil que realizan más del 98% de las atenciones en materia de protección, reciben sólo un 60% del presupuesto. Mientras, y pese a que los programas de administración directa del SENAME atienden a menos del 2% de los niños, reciben alrededor de 40% de los recursos del servicio. En promedio, un organismo colaborador recibe entre \$ 262 mil pesos mensuales por niño, mientras que un centro de administración directa más que lo triplica⁵.

El proyecto que se ha presentado tiene grandes deficiencias que pueden impactar negativamente y de manera importante la calidad de las intervenciones en materia de protección a la infancia. En lo específico, no mejora al servicio, ni fortalece sus programas ni la coordinación de estos.

Además, se desconfía del rol de la sociedad civil en la política de infancia, cuya labor se realiza a través de los organismos colaboradores que ahora pasarían a llamarse “entidades acreditadas”. En la práctica, esto genera una de las mayores injusticias al discriminar, tanto en recursos como en atención, entre los niños que son asignados a las entidades acreditadas y los que asisten a los programas administrados directamente por el Estado.

5 Para el cálculo se utilizó la información de las subvenciones y el presupuesto de administración directa.

DOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Como ya se ha dicho, el SENAME se dividirá en dos: un servicio orientado a la protección de menores y el otro, a la reinserción de los que hubieren entrado en conflicto con la justicia. Debe señalarse que esta separación de funciones tiene fundamento, pues se trata de actividades cuyo único factor común es el niño, pero la naturaleza de los problemas que se tratan de solucionar así como las medidas que deben adoptarse son evidentemente distintas.

El principal elemento que impulsó la separación del SENAME se encuentra en la crisis institucional que lleva varios años, y la muerte, en época reciente, de dos niños, lo que volvió a visibilizar las presuntas irregularidades y negligencias que estaban ocurriendo al interior de los centros del SENAME.

Uno de los argumentos para dividir el SENAME y crear un servicio con exclusiva dedicación a la protección, es la necesidad de separar a los niños que requieren protección con los que habrían infringido la ley. De hecho, se menciona en el mensaje del proyecto de ley del Servicio de Protección, que el comité revisor de la Convención sobre los Derechos del Niño realizó una serie de observaciones en cuanto a que el SENAME tenga bajo su responsabilidad a niños que necesitan protección con los que habrían infringido la ley⁶.

Sin embargo, a pesar de que el SENAME actualmente es responsable tanto de los niños que requieren protección como de los infractores, éstos servicios ya están divididos en tres áreas: protección, justicia juvenil y adopción. Para cada una de estas áreas existen programas y objetivos específicos. Los centros de internación del área juvenil son distintos a los centros residenciales del área de protección. Por ende, la separación institucional en la práctica ya existe, lo que no obsta que debiese reforzarse y reflejarse en el régimen legal. Así, la separación propuesta resulta bien orientada.

Finalmente, en relación al proyecto en materia de protección a la infancia es importante señalar que lamentablemente los cambios institucionales propuestos no significarían necesariamente mejoras en la calidad en las prestaciones entregadas. En concreto, el proyecto de ley no hace referencia de ningún cambio en los programas de intervención, sólo aumentan el límite máximo de la subvención que pueden recibir los centros residenciales administrados por entidades acreditadas (lo que no necesariamente se traducirá en mayores recursos) y no asignan mayores recursos a los programas que buscan recuperar las vulneraciones que han presentado los niños. Se debe considerar que los centros residenciales son sólo uno de los tantos programas que realiza el área de protección.

⁶ Es así como en la Compilación de Observaciones finales sobre países de América Latina y el Caribe, período 1993-2006 se señala: "Si bien toma nota de que está previsto reformar el Servicio Nacional de Menores, el Comité observa con preocupación que actualmente el SENAME aún tiene a cargo tanto a los niños que necesitan cuidado y protección como a los que tienen conflictos con la ley, y que los servicios sociales no están suficientemente descentralizados".

REGLAMENTOS

El proyecto efectúa diversas remisiones a reglamentos para varias materias, algunas de carácter relevante, como la administración provisional de una entidad acreditada, la definición de los estándares y procesos de acreditación.

Si bien en estos casos no se “obliga” por ley a la dictación del reglamento, lo que iría contra la facultad presidencial del artículo 32 N°6, en todo caso debe revisarse si estos reglamentos podrían comprender materias reservadas el

dominio legal. Es decir, el ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución es absolutamente distinta de la potestad reglamentaria autónoma, y no puede por lo tanto ser ejercida sino cuando una norma legal la demanda, expresa o tácitamente, como necesaria para la ejecución de ley.

Los artículos de proyecto de ley del SENAME que merecen ser analizados en función de las remisiones al reglamento, son, preferentemente, los artículos 14, inciso final; 16, inciso final; 20 letras a) y b); 22, inciso final, y 26, inciso final



COMENTARIOS ESPECÍFICOS

Además de los aspectos generales que se han expuesto, existen otros de carácter más puntual que merecen algún comentario.

ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN ESPECIALIZADA

El artículo 2° presenta una definición acotada de la vulneración que puede presentar resulta restrictiva: “La protección especializada es aquella provisión de prestaciones dirigidas a restituir el ejercicio de los derechos vulnerados

de niños y niñas debido a abuso, maltrato y trata, según lo definan las leyes respectivas; a explotación sexual y laboral infantil; a abandono cuando carezcan de cuidados maternos o paternos; y a atender los niños y niñas sujetos de adopción. La protección especializada estará también dirigida a la reparación de las consecuencias de la vulneración de derechos.”

Así, las hipótesis en que se trata de protección especializada para esta ley sólo son:

1. Abuso
2. Maltrato
3. Trata

4. Explotación sexual comercial infantil
5. Explotación laboral infantil
6. Abandono
7. Adopción

Pero puede haber hipótesis de vulneración que no quedan comprendidas en la definición del proyecto: por ejemplo: niños en situación de calle (que podría tal vez incluirse en el “abandono”), pero también hay niños con serias discapacidades, niños con problemas graves de salud mental, consumo problemático de drogas o alcohol, deserción escolar, problemas conductuales graves, imputación de comisión de infracciones a la ley (menores de 14 años).

Por otra parte, algunas actuales líneas programáticas, según el mensaje, deberían introducirse en otros niveles del nuevo sistema de garantías, que, como se ha dicho, es un proyecto de ley que está en segundo trámite en el Senado. Ello obliga a un esfuerzo de coordinación legislativa, sin el cual podrían quedar vacíos o duplicidades.

CAMBIO DE DENOMINACIÓN

El cambio de “colaboradores acreditados” a “entidades y prestadores acreditados” no se observa en qué mejora el sistema de atención a la niñez más allá del cambio semántico pero puede producir problemas de adecuación normativa y generará inconvenientes interpretativos en la jurisprudencia de Cortes y

administrativa lo que puede ser un elemento de incertidumbre. El cambio es innecesario.

INSTITUCIONES COADYUVANTES

Existen hoy día instituciones coadyuvantes que asumen responsabilidades frente a menores en situación de abandono u otra característica que amerite ayuda y protección, y que no reciben subvención estatal. A estas instituciones se refiere el artículo 3° de la ley vigente del SENAME (DL 2.465 de 1979) en los siguientes términos: En especial, al Servicio Nacional de Menores corresponderá:

7. Proporcionar, cuando procediere, ayuda técnica, material o financiera a las instituciones públicas y privadas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del Servicio.
8. Impartir instrucciones generales sobre asistencia y protección de menores a las entidades coadyuvantes y supervigilar su cumplimiento.

Ahora bien, el artículo 8° del proyecto de ley, que es el equivalente al artículo 3° de la ley actual, no se refiere a esta clase de instituciones, lo que deja instalada la duda sobre si podrían seguir existiendo o no o si serían consideradas para algún tipo de apoyo técnico u otro tipo de orientación. Y lo más importante, si serán supervisadas por el Servicio. El hecho de que no perciban subvención del Estado no significa que la ley las pueda olvidar completamente, pues participan en acciones que en definitiva,

son de interés público, como es el auxilio de menores en situación de abandono u otra circunstancia que amerite su atención por una entidad especializada.

CAPACITACIÓN

Una norma interesante dentro de las actuales atribuciones del SENAME es la que le permite “auspiciar y organizar cursos permanentes o temporales, sobre materias de su competencia, para capacitar a padres de familia, Juntas de Vecinos u otras organizaciones comunitarias y a personal de establecimientos públicos y privados, como asimismo congresos y seminarios a nivel regional, nacional o internacional. En el caso de congresos y seminarios de carácter internacional, deberá contar con la autorización previa del Ministerio de Justicia (artículo 3° N°12).

Nada de esto aparece en la nueva normativa, por lo que cabría preguntar si se prescinde de

ella o si se estima que estaría contenida en otras atribuciones, y en cuáles.

AUDITORÍAS

El artículo 18 del proyecto dispone que El Servicio podrá contratar auditorías externas las cuales deberán pronunciarse sobre el cumplimiento de estándares y normas de carácter general por parte de las entidades o prestadores acreditados y del Servicio.

Si bien se trata de una atribución que el Servicio podrá aplicar discrecionalmente, que es lo propio de las atribuciones de este tipo, puede sugerirse establecer cierta periodicidad dentro del cual tales auditorías deban tener lugar, establecer alguna circunstancia que debe hacer efectiva la atribución y generar algún mecanismo en que los resultados de las auditorías sean conocidos y publicados. De lo contrario, podría resultar una disposición sin vigencia efectiva ■■■

VI. **TEXTO DEL** PROYECTO DE LEY

TÍTULO I

DEL SERVICIO NACIONAL

DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA DE NIÑOS Y NIÑAS

Párrafo 1°

Naturaleza y objeto

Artículo 1.- Creación del Servicio. Créase el Servicio Nacional de Protección Especializada de niños y niñas, en adelante “el Servicio”, como un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que estará sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social.

El Servicio estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en el Título VI de la ley N° 19.882 y tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago.

Artículo 2.- Protección Especializada. La protección especializada es aquella provisión de prestaciones dirigidas a restituir el ejercicio de los derechos vulnerados de niños y niñas debido a abuso, maltrato y trata, según lo definan las leyes respectivas; a explotación sexual y laboral infantil; a abandono cuando carezcan de cuidados maternos o paternos; y a atender los niños y niñas sujetos de adopción. La protección especializada estará también dirigida a la reparación de las consecuencias de la vulneración de derechos.

Artículo 3.- Objeto del Servicio. El Servicio tendrá por objeto diseñar, administrar y proveer prestaciones de protección especializada a niños y niñas a que se refiere el artículo 2, incluyendo a sus padres y/o madres y a quienes tengan el cuidado del niño o niña cuando sea indispensable para alcanzar los objetivos de la protección especializada, en las condiciones y modalidades establecidas en las leyes y en sus respectivos reglamentos.

En la ejecución de las prestaciones de protección especializada de su competencia, deberá velar por el respeto de los derechos de los niños y niñas, reconocidos en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y en la legislación nacional.

El Servicio proveerá estas prestaciones por sí o a través de terceros, a requerimiento del órgano competente.

Párrafo 2°

Principios orientadores

Artículo 4.- Interés superior del niño. En todas sus actuaciones, el Servicio tendrá en especial consideración el interés superior de los niños y niñas.

Artículo 5.- Protección del derecho de los niños y niñas a su vida familiar. El Servicio propenderá a ejercer sus funciones de una manera compatible con el goce del niño o niña al derecho a la vida familiar.

El Servicio priorizará que, en la ejecución de las medidas de protección, se propenda al fortalecimiento del rol protector de la familia y apoyará las intervenciones destinadas a restituir el derecho a vivir en familia.

La separación del niño o niña de su familia o del adulto responsable es una medida excepcional, que compete exclusivamente a los Tribunales de Familia.

Artículo 6.- Derecho a ser oído. En las actuaciones que realice el Servicio en el marco de la ejecución de las acciones y medidas de protección especializada, los niños y niñas tendrán derecho a ser oídos, en consonancia con la evolución de sus facultades.

Artículo 7.- Deber de secreto. El tratamiento de datos personales y sensibles por parte del Servicio quedará sujeto a lo dispuesto en la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada. Los funcionarios del Servicio deberán guardar secreto de la información de la que tomen conocimiento en el cumplimiento de sus funciones, con excepción de los casos previstos por la ley.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso segundo⁷ del artículo 125 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, se estimará que los hechos que infrinjan esta disposición vulneran gravemente el principio de probidad administrativa, sin perjuicio de las demás sanciones y responsabilidades que procedan.

La obligación de secreto también se aplicará al personal que se desempeñe en las entidades y prestadores acreditados, quienes quedarán sujetos a las reglas de responsabilidad previstas en el Título V⁸ de la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.

⁷ Artículo 125.- La destitución es la decisión de la autoridad facultada para hacer el nombramiento de poner término a los servicios de un funcionario.

[Inciso segundo] La medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, y en los siguientes casos :

- a) Ausentarse de la institución por más de tres días consecutivos, sin causa justificada;
- b) Infringir las disposiciones de las letras i), j), k) y l) del artículo 84 de este Estatuto;
- c) Condena por crimen o simple delito, y
- d) Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad de las que haya afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado.
- e) En los demás casos contemplados en este Estatuto o leyes especiales.

⁸ Título V De la responsabilidad por las infracciones a esta ley

Artículo 23.- La persona natural o jurídica privada, el organismo público responsable del banco de datos personales deberá indemnizar el daño patrimonial y moral que causare por el tratamiento indebido de los datos, sin perjuicio de proceder a eliminar, modificar o bloquear los datos de acuerdo a lo requerido por el titular o, en su caso, lo ordenado por el

Párrafo 3°

Funciones y Organización

Artículo 8.- Funciones del Servicio. Corresponderán al Servicio las siguientes funciones:

- a) Diseñar y ejecutar los programas de protección especializada dirigidos a la restitución y reparación de los derechos de niños y niñas. La ejecución de dichos programas podrá realizarse directamente o a través de terceros.
- b) Dictar normas de carácter general basándose en los estándares establecidos por la Subsecretaría de la Niñez.
- c) Acreditar a las entidades, prestadores y programas de protección especializada, de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5;
- d) Supervisar técnica, administrativa y financieramente la labor que ejecutan las entidades y prestadores acreditados conforme a los estándares que dicte la Subsecretaría de la Niñez y a las normas de carácter general señaladas en la letra b). El Servicio estará facultado para solicitar información a las entidades y prestadores acreditados, quienes estarán obligados a entregarla.
- e) Realizar estudios, análisis y propuestas para el cumplimiento de su objeto y evaluar periódicamente los programas que ejecute directamente o a través de terceros, especialmente aquellos referidos a cuidados alternativos de tipo residencial o familiar, conforme a los estándares que dicte la Subsecretaría de la Niñez y a las normas de carácter general señaladas en la letra b).
- f) Mantener y administrar un registro actualizado de información de los antecedentes relativos a las prestaciones de protección especializada que reciban niños y niñas. En el ejercicio de esta función deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13.
- g) Entregar, oportuna y periódicamente, información suficiente al órgano competente sobre la oferta programática existente en el territorio. Adicionalmente, entregará antecedentes para la revisión de las medidas de protección, a requerimiento del órgano competente.

Asimismo, los órganos competentes comunicarán al Servicio la adopción de una medida de protección y sus antecedentes fundantes.

Para la remisión y recepción de la información se privilegiará el sistema de transmisión electrónica de datos, a través de interconexión, que permita su traspaso automático, periódico y masivo.

- h) Colaborar y requerir información a los órganos del Estado en el marco de sus competencias, y

tribunal.

La acción consiguiente podrá interponerse conjuntamente con la reclamación destinada a establecerla infracción, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 173 del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, las infracciones no contempladas en los artículos 16 y 19, incluida la indemnización de los perjuicios, se sujetarán al procedimiento sumario. El juez tomará todas las providencias que estime convenientes para hacer efectiva la protección de los derechos que esta ley establece. La prueba se apreciará en conciencia por el juez.

El monto de la indemnización será establecido prudencialmente por el juez, considerando las circunstancias del caso y la gravedad de los hechos.

- i) Arbitrar procedimientos idóneos para recabar la opinión de los niños y niñas que sean sujetos de una medida de protección.
- j) Informar al órgano competente cualquier cambio de circunstancias que hiciera recomendable la revisión de la medida decretada, y una vez cumplidas, su resultado.
- k) Ejercer todas las demás funciones que la ley le encomiende.

Artículo 9.- Organización del Servicio. La administración y dirección superior del Servicio estará a cargo de un Director Nacional, quien será el Jefe Superior del Servicio y tendrá su representación legal.

El Servicio contará con direcciones regionales.

Un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social determinará la estructura interna del Servicio, de conformidad a lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 1 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, con sujeción a la planta y dotación máxima de personal. Para estos efectos deberán considerarse, a lo menos, una Subdirección de Prestaciones y unidades de Desarrollo Institucional y Administración y Finanzas.

Artículo 10.- Funciones del Director Nacional. Corresponderán al Director Nacional las siguientes funciones:

- a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y administrar el funcionamiento del Servicio y ejercer, respecto de su personal, las atribuciones propias de su calidad de Jefe Superior del Servicio.
- b) Coordinar, controlar y evaluar la gestión que desarrolle el Servicio y las Direcciones Regionales para el logro de sus fines.
- c) Dictar las resoluciones e instrucciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y el buen funcionamiento del Servicio.
- d) Rendir cuenta pública anualmente de conformidad a lo establecido en el artículo 72⁹ de la ley N° 18.575 orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, incorporando una evaluación de las actuaciones del Servicio y de las entidades y prestadores acreditados, e informando de los que hubieren perdido su acreditación.
- e) Representar judicial y extrajudicialmente al Servicio y conferir poder a abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, aun cuando no sean funcionarios del Servicio, con las facultades de ambos incisos del artículo 7¹⁰, del Código de Procedimiento Civil, de conformidad a las normas vigentes.

9 Artículo 72.- Los órganos de la Administración del Estado, anualmente, darán cuenta pública participativa a la ciudadanía de la gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y de su ejecución presupuestaria. Dicha cuenta deberá desarrollarse desconcentradamente, en la forma y plazos que fije la norma establecida en el artículo 70.

En el evento que a dicha cuenta se le formulen observaciones, planteamientos o consultas, la entidad respectiva deberá dar respuesta conforme a la norma mencionada anteriormente.

10 Art. 7° (8°). El poder para litigar se entenderá conferido para todo el juicio en que se presente, y aun cuando no exprese las facultades que se conceden, autorizará al procurador para tomar parte, del mismo modo que podría hacerlo el poderdante, en todos los trámites e incidentes del juicio y en todas las cuestiones que por vía de reconvencción se promuevan, hasta la ejecución completa de la sentencia definitiva, salvo lo dispuesto en el artículo 4° o salvo que la ley exija intervención personal de la parte misma. Las cláusulas en que se nieguen o en que se limiten las facultades expresadas, son nulas. Podrá, asimismo, el procurador delegar el poder obligando al mandante, a menos que se le haya negado esta facultad.

Sin embargo, no se entenderán concedidas al procurador, sin expresa mención, las facultades de desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda

- f) Delegar funciones o atribuciones específicas en funcionarios del Servicio.
- g) Las demás que señalen las leyes.

Artículo 11.- Funciones del Director Regional. A los Directores Regionales del Servicio corresponderán las siguientes funciones:

- a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y administrar el funcionamiento de la Dirección Regional. Para ello, podrá dictar las resoluciones e instrucciones que sean necesarias para su buen funcionamiento, de conformidad a las normas generales dictadas por el Director Nacional.
- b) Coordinar el trabajo del Servicio con las entidades y prestadores acreditados, y los demás órganos competentes, en el cumplimiento de sus funciones.
- c) Supervisar el cumplimiento de los estándares y de las normas de carácter general en la ejecución de las prestaciones por parte de las entidades y prestadores acreditados en su región y en aquellas ejecutados directamente por el Servicio.
- d) Tomar, de manera prioritaria, las acciones conducentes a la protección integral de los derechos de los niños y niñas que se encuentran bajo su cuidado en los centros de administración directa. Los centros de administración directa dependerán administrativamente del Director Regional del Servicio.
- e) Celebrar actos, contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Dirección Regional.
- f) Administrar los bienes del Servicio que se encuentren asignados a la Dirección Regional.
- g) Delegar funciones o atribuciones específicas en funcionarios de la Dirección Regional.
- h) Desempeñar las demás funciones y atribuciones que le asignen las leyes y reglamentos.

Párrafo 4°

De la Protección Especializada

Artículo 12.- Líneas de acción y programas de protección especializada. Las líneas de acción de protección especializada serán las contempladas en el artículo 3¹¹ de la ley N° 20.032 y tendrán por objetivo la reparación y restitución de los derechos vulnerados de los niños y niñas conforme al objeto de esta ley. Dichas líneas se desarrollarán a través de programas que contemplen prestaciones especializadas, de acuerdo al reglamento de la ley antes citada. Estos programas serán complementados por las prestaciones que brinden otros servicios.

contraria, absolver posiciones, renunciar los recursos o los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitadores, aprobar convenios y percibir.

11 Véase más adelante el artículo 34 N°3 de este proyecto de ley.

Los programas de protección especializada deberán encontrarse acreditados de conformidad al párrafo 5°.

Artículo 13.- Del registro de protección especializada. El Registro a que se refiere la letra f) del artículo 8 deberá mantener información de los niños y niñas señalados en el artículo 2 que reciban prestaciones de protección especializada, con el objeto de reunir sus antecedentes relativos a dichas prestaciones, servir de antecedente para las supervisiones técnicas y administrativas que deba ejecutar el Servicio, y llevar el control de las transferencias de los recursos públicos que se destinen a las entidades o prestadores acreditados. Este registro de información deberá vincularse, en lo que sea procedente, con el sistema integrado de información de la Niñez administrado por la Subsecretaría de la Niñez, la cual dictará las normas necesaria para la interoperabilidad de ellos.

El registro deberá contar, a lo menos, con la siguiente información:

- a) Individualización de niños y niñas ingresados como beneficiarios de prestaciones especializadas.
- b) Individualización de las medidas que ordenan su ingreso, su ejecución, sus modificaciones, si las hubiere, y el término de las mismas.
- c) Disponibilidad de prestaciones especializadas.

Las entidades y prestadores acreditados estarán obligados a proporcionar la información necesaria que el Servicio les solicite para el registro a que se refiere este artículo y para el cumplimiento de sus funciones, en los plazos, forma y condiciones que éste determine.

Los órganos del Estado en el marco de sus competencias, estarán obligados a proporcionar la información necesaria que el Servicio les solicite para el registro a que se refiere este artículo y para el cumplimiento de sus funciones.

Un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social establecerá las directrices generales para la remisión y recepción de datos entre el Registro de Información de Protección Especializada de Niños y Niñas y el Sistema integrado de información de la Niñez, y las normas para regular la interconexión de los datos, que permita su traspaso automático, periódico y masivo, y las normas necesarias para su correcta administración.

La información contenida y administrada por este registro estará disponible para los órganos de la Administración y los órganos judiciales competentes, y para las entidades y prestadores acreditados para fines de administración y registro de las intervenciones realizadas.

Párrafo 5°

De los estándares y de la acreditación de entidades, prestadores y programas de protección especializada

Artículo 14.- De los estándares para la Acreditación. La Subsecretaría de la Niñez fijará los estándares para la acreditación de las entidades, de los prestadores y de los programas de protección especializada, incluidos aquéllos que ejecute directamente el Servicio.

Los estándares determinarán la organización, gestión y el funcionamiento administrativo, financiero y técnico de las entidades y prestadores y la evaluación de aquellos para el logro de los objetivos del Servicio. Los estándares fijados para los programas de protección especializada propenderán a incorporar la experiencia y conocimiento desarrollados en cuanto a prestaciones de protección y a mejorar sostenidamente la calidad de sus intervenciones, especialmente las prácticas que han demostrado un buen funcionamiento.

Un reglamento dictado por el Ministerio de Desarrollo Social y suscrito por el Ministro de Hacienda, fijará los estándares señalados en este artículo.

Artículo 15.- De las Normas de Carácter General. El Servicio podrá fijar normas de carácter general obligatorias para las entidades y prestadores acreditados y para la ejecución de los programas de protección especializada, incluidos aquellos que ejecute directamente. Dichas normas deberán atenerse a los estándares que emita la Subsecretaría de la Niñez.

Para su dictación, el Servicio podrá considerar las características de las distintas unidades territoriales, atendida su ubicación geográfica, las características de los individuos sujetos de atención y cualquier elemento de similar naturaleza que estime conveniente. El Servicio deberá velar siempre porque estas diferenciaciones no signifiquen un detrimento en la calidad de las prestaciones.

Artículo 16.- Acreditación de entidades, prestadores y programas de protección especializada. El Servicio acreditará a las entidades, a los prestadores y los programas de protección especializada y llevará un registro de los mismos.

Las entidades o prestadores acreditados deberán ser personas jurídicas sin fines de lucro o personas naturales, de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.032 y su reglamento.

Un reglamento dictado por el Ministerio de Desarrollo Social determinará los procesos de acreditación de las entidades y prestadores, y de los programas; la forma en que se acreditará el cumplimiento de los requisitos respectivos y las causales para el rechazo y la revocación de la acreditación. Asimismo, contendrá las disposiciones necesarias para la operación de un registro de entidades y prestadores acreditados y toda otra norma necesaria para su adecuado funcionamiento.

Párrafo 6°

De la supervisión y evaluación de la protección especializada

Artículo 17.- De la Supervisión. El Servicio supervisará técnica, administrativa y financieramente el cumplimiento de los estándares y las normas de carácter general en la ejecución de los proyectos de protección especializada.

El Servicio revisará las condiciones en que se encuentren los niños y niñas sujetos de prestaciones especializadas de protección de derechos y, especialmente, de aquellos que se encuentren sujetos a cuidados alternativos de tipo residencial o familiar.

Artículo 18.- De las auditorías externas. El Servicio podrá contratar auditorías externas las cuales deberán pronunciarse sobre el cumplimiento de estándares y normas de carácter general por parte de las entidades o prestadores acreditados y del Servicio.

Las auditorías señaladas en este artículo se considerarán como un insumo para efectos de ejercer la supervisión a que se refiere el artículo 17.

Artículo 19.- De la evaluación. Corresponderá al Servicio efectuar la evaluación periódica de los programas de protección especializada en conformidad a los estándares y normas de carácter general, con el objeto de generar y difundir estudios, análisis y propuestas que permitan su mejora continua.

Artículo 20.- De las sanciones. El incumplimiento por parte de las entidades o prestadores acreditados de las obligaciones establecidas en los convenios o en las normas vigentes dará lugar a la imposición de una o más de las siguientes sanciones por parte del Servicio, en atención a su gravedad:

- a) Multa equivalente a un 10% y hasta un 60% de los recursos que correspondan por concepto de subvención promedio de los tres últimos meses. La multa podrá elevarse al doble en caso de reiteración. El monto de la multa dependerá de la gravedad del incumplimiento del que se trate, según los criterios que establezca el respectivo reglamento.
- b) Término anticipado y unilateral del respectivo convenio, conforme a las causales establecidas en el reglamento.
- c) Inhabilitación temporal de la entidad o prestador acreditado, hasta por dos años, para ejecutar el programa de protección especializada a nivel regional.
- d) Inhabilitación de la entidad o prestador acreditado, hasta por dos años, para ejecutar la línea de acción a nivel nacional o regional.
- e) Término de la acreditación de la entidad o prestador.

Las sanciones anteriores procederán sin perjuicio de la pérdida de la personalidad jurídica, conforme a la ley.

Para la determinación de la sanción el Servicio deberá procurar que su aplicación resulte óptima para el cumplimiento de los fines de la protección especializada de niños y niñas, y deberá considerar al efecto las siguientes circunstancias:

1. La gravedad de la conducta y, especialmente, el hecho de haber vulnerado la vida e integridad física y psíquica de los niños y niñas sujetos de prestaciones de protección especializada.
2. El daño o riesgo causado al correcto funcionamiento del Servicio o a la provisión de prestaciones de protección especializada.
3. El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, en caso que lo hubiese.
4. El haber sido sancionado previamente por infracciones a los deberes establecidos en la ley, el reglamento o el respectivo convenio.

En los casos de aplicación de la sanción establecida en la letra b), el Director Regional respectivo podrá adjudicar directamente a otra entidad o prestador acreditado la ejecución de las prestaciones establecidas en el convenio terminado, por el plazo que restare a aquél.

En caso de aplicación de la sanción previstas en la letra e), la entidad o prestador sancionado no podrá solicitar nuevamente la respectiva acreditación, sino después de dos años desde que haya quedado firme la resolución que aplicó la sanción.

Las resoluciones firmes que apliquen sanciones a entidades o prestadores acreditados deberán publicarse en el sitio electrónico mediante el cual el Servicio dé cumplimiento a las obligaciones de transparencia activa de la ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública.

Artículo 21.- Procedimiento de reclamación. La entidad o prestador acreditado afectado por la aplicación de una sanción podrá reclamar la legalidad de la misma dentro del plazo de diez días hábiles, contado desde la notificación de la respectiva resolución, ante la Corte de Apelaciones correspondiente a su domicilio.

La Corte de Apelaciones dará traslado de la reclamación al Servicio, notificándolo por oficio. Éste dispondrá del plazo de diez días hábiles contado desde que se notifique la reclamación interpuesta, para formular observaciones.

Evacuado el traslado por el Servicio o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación y la causa se agregará extraordinariamente a la tabla de la audiencia más próxima, previo sorteo de la Sala. La Corte podrá abrir un término probatorio, que no podrá exceder de siete días hábiles, y escuchar los alegatos de las partes.

La Corte dictará sentencia dentro del término de quince días hábiles, la que será inapelable.

Párrafo 7°

De la Administración Provisional o de Cierre

Artículo 22.- De la Administración Provisional. Sin perjuicio de la aplicación de alguna de las sanciones que dispone el artículo 20, el Director Regional que corresponda, mediante resolución fundada podrá disponer la administración provisional por parte del Servicio de la entidad acreditada, sólo cuando concurra alguna de las causales señaladas en el artículo siguiente, con el objeto de asegurar su adecuado funcionamiento y la continuidad del servicio. En

el caso de los programas que desarrollen las líneas de acción de programas ambulatorios y adopción, sólo procederá la Administración Provisional en las causales contempladas en las letras a), c), d) y f) del artículo 25.

Un reglamento determinará el contenido mínimo de la resolución que declare la procedencia de la administración provisional, los requisitos que debe cumplir el administrador provisional que designe el Servicio, el límite de duración de su gestión y las condiciones para su cese, la que en todo caso no podrá extenderse más allá de la vigencia del convenio que se haya suscrito con la entidad o prestador acreditado, salvo que reste menos de doce meses para su término, el contenido del plan de trabajo y las demás normas necesarias para su adecuada ejecución.

Artículo 23.- De la Administración de Cierre. En el caso contemplado en el artículo 20 literal b) procederá la designación de un administrador provisional para el cierre del convenio. Quien sea designado como administrador de cierre deberá cumplir con los requisitos establecidos para el administrador provisional y tendrá sus mismas facultades.

Artículo 24.- Requisitos del Administrador Provisional o de cierre. Podrá ser designado administrador provisional o de cierre un funcionario del Servicio de Protección especializada o una persona ajena a él que cumpla con los siguientes requisitos:

- a) Estar en posesión de un grado académico o título profesional de alguna institución reconocida oficialmente por el Estado.
- b) Acreditar experiencia de al menos cinco años en materia de protección especializada.

La idoneidad de la persona a designar en el cargo de administrador provisional o de cierre deberá ser evaluada considerando las características, el tamaño y complejidad de la institución, así como el proyecto objeto de la administración.

En el caso que la Administración Provisional o de cierre se ejecute por personas ajenas al Servicio, su remuneración se pagará con los recursos financieros que corresponda a la subvención que se le otorgaba a la entidad acreditada objeto de la medida.

Artículo 25.- Causales para el nombramiento de un administrador provisional. Sólo se podrá nombrar un administrador provisional en los siguientes casos:

- a) Cuando el Servicio constate vulneración a la vida o integridad física o psíquica de los niños o niñas causada por acciones u omisiones imputables a la entidad o sus dependientes y que para el cese de dichas vulneraciones se requiera la intervención inmediata del Servicio.
- b) Cuando el incumplimiento de las obligaciones del convenio ponga en riesgo la continuidad del servicio.
- c) Cuando, por razones imputables a la entidad acreditada, se haga imposible la mantención del servicio a consecuencia de sanciones, medidas precautorias, embargos, ejecuciones o retiros que afecten los bienes necesarios para la prestación del servicio.
- d) Cuando, por causa imputable a la entidad acreditada, se suspendan reiteradamente los servicios básicos para el buen funcionamiento del servicio.
- e) Cuando exista atraso reiterado en el pago de las remuneraciones o de las cotizaciones previsionales o de salud del personal de la entidad acreditada. Se entenderá por atraso reiterado, la mora total o parcial en el pago de tres meses consecutivos o de tres en un período de seis meses.

- f) Cuando, en la ejecución de programa de protección especializada se produzcan hechos de violencia contra los niños y niñas, sin que la entidad acreditada haya tomado medidas conducentes a proteger a los niños y niñas.

La resolución del Director Regional que disponga la administración provisional y designe a quien deba asumirla se notificará por carta certificada a la entidad o prestador acreditado.

La entidad o prestador acreditado afectado por la medida de nombramiento de administrador provisional podrá reclamar la legalidad de la misma dentro del plazo y en la forma señalada en el artículo 21.

Artículo 26. Procedimiento de Administración Provisional o de Cierre. Al asumir sus funciones, el administrador provisional o de cierre, designado por el Servicio, levantará un acta que dé cuenta del estado administrativo y financiero de la entidad acreditada, que será remitido al Director Regional que corresponda.

A más tardar, dentro de los veinte días siguientes a su nombramiento, deberá presentar un plan de trabajo, que deberá ser aprobado por el Director Regional.

Una vez que dichos informes hayan sido aprobados por el Director Regional, éstos serán incorporados a un registro de carácter público, de conformidad a lo dispuesto en el reglamento.

Artículo 27.- Facultades del Administrador Provisional o de cierre. Para el cumplimiento de su objeto, el administrador provisional y de cierre deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el respectivo convenio. Le corresponderá, asimismo, la representación legal y el ejercicio de todas aquellas facultades que la ley y los respectivos estatutos o escritura social, según corresponda, le confieren a la entidad de que se trate.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el administrador provisional o el administrador de cierre tendrá, especialmente, las siguientes facultades:

- a) Ejercer toda acción destinada al cumplimiento de las obligaciones del respectivo convenio, especialmente la entrega de las prestaciones de protección especializada que corresponda.
- b) Solicitar al Servicio de Impuestos Internos, o a cualquier otro órgano del Estado, toda aquella información que estime conveniente para el buen cumplimiento de sus funciones.
- c) Poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier hecho que pueda constituir una infracción de la ley, en particular denunciar cualquier hecho que pueda ser constitutivo de delito.
- d) Ejercer las acciones que correspondan para la recuperación de los recursos que hayan sido utilizados en vulneración de las leyes, los reglamentos o el respectivo convenio, así como aquéllas destinadas a perseguir la responsabilidad civil, penal o administrativa de quienes incurrieron en dichos actos.

Las acciones que ejecute el administrador provisional o de cierre se realizarán con cargo a los recursos emanados del respectivo convenio.

Artículo 28.- Efectos de la Administración Provisional y de la Administración de Cierre. Desde la fecha en que se disponga la administración, la entidad acreditada quedará inhabilitada para percibir el pago estipulado en el respectivo convenio y será sustituida por el administrador provisional o el de cierre designado por el Servicio para la percepción del pago mencionado y para todos los efectos legales que emanen del convenio.

Sin perjuicio de lo anterior, la entidad acreditada será responsable de todas las obligaciones que se hubieren generado en virtud del funcionamiento de la prestación del servicio con antelación a la resolución que disponga la administración provisional o de cierre.

Párrafo 8°

Del Patrimonio

Artículo 29.- Del patrimonio. El patrimonio del Servicio estará formado por:

- a) Los recursos que se le asignen anualmente en la Ley de Presupuestos del Sector Público y otras leyes.
- b) Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporeales, que se le transfieran o adquiera a cualquier título, y los frutos de ellos.
- c) Los aportes de la cooperación internacional que reciba para el cumplimiento de sus objetivos, a cualquier título.
- d) Las donaciones que se le hagan y las herencias y legados que acepten con beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no se someterán al trámite de insinuación.

Párrafo 9°

Del personal

Artículo 30.- Del personal. El personal del Servicio estará afecto a las disposiciones del Decreto con Fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo y en materia de remuneraciones, a las normas del decreto ley N° 249 de 1974, y su legislación complementaria.

Artículo 31.- De las prohibiciones e inhabilidades para ser funcionario del Servicio.

Los funcionarios del Servicio se encontrarán afectos a los requisitos generales para ingresar a la Administración del Estado y a las inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio de la función pública establecidas en la ley. Además, no podrán desempeñar funciones en el Servicio las siguientes personas:

Aquellas inhabilitadas para trabajar con niños o que figuren en el registro de inhabilidades para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad, que lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación, en conformidad a la ley N° 20.594 que Crea Inhabilidades para Condenados por Delitos Sexuales contra Menores y Establece Registro de Dichas Inhabilidades.

Las que han sido condenadas por delitos en contexto de violencia y sus antecedentes se encuentren en el registro especial que para estos efectos lleva el Registro Civil e Identificación, en conformidad con la ley N° 20.066.

Las que han sido condenadas por delitos contra la integridad sexual, conforme a los Registros del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Jueces, personal directivo y auxiliares de la administración de justicia de los juzgados de familia creados por la ley N° 19.968.

Integrantes de los consejos técnicos de familia creados por la ley N° 19.968.

Párrafo 10

Disposiciones Finales

Artículo 32.- Los niños y niñas que reciban prestaciones de protección especializada, de conformidad al artículo 2 de esta ley, deberán ser atendidos prioritariamente en el marco de los programas vigentes en los órganos de la Administración del Estado.

Los Ministerios de Educación, Salud, Deporte y de Desarrollo Social, por sí o a través de los servicios que correspondan, y el Servicio Nacional de Turismo, además del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, deberán priorizar, dentro de sus programas vigentes, acciones específicas para dichos niños y niñas. Anualmente dichos organismos informarán de estas acciones en sus respectivas cuentas públicas.

La información señalada en el inciso anterior deberá estar disponible en la página web de cada servicio o Ministerio. En la cuenta pública del Servicio de Protección Especializada de Niños y Niñas, se deberá informar las prestaciones brindadas por otros órganos del Estado a los niños y niñas usuarios del Servicio.

Artículo 33.- El Servicio Nacional de Protección Especializada de niños y niñas, en el ámbito de las funciones y atribuciones que le otorga esta ley, será considerado, para todos los efectos, sucesor y continuador legal del Servicio Nacional de Menores, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones, con excepción de las materias de administración y ejecución de las medidas y sanciones contempladas por la ley N° 20.084, y en general, todas aquellas que el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil asuma, cualquiera sea su denominación legal. Las referencias que hagan las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas al señalado Servicio Nacional de Menores, en las materias que corresponden al Servicio Nacional de Protección Especializada de niños y niñas, se entenderán efectuadas a este último.

TÍTULO II

MODIFICACIONES A LA LEY N°20.032

Artículo 34.- Adecuaciones a la ley N° 20.032. Modifícase la ley N° 20.032 que Establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Sename y su régimen de subvención, en el siguiente sentido:

1) Modifícase el artículo 1 del siguiente modo:

a) Sustitúyese el inciso primero¹² por el siguiente:

“Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley tienen por objeto establecer la forma y condiciones en que el Servicio Nacional de Protección Especializada de niños y niñas, en adelante, el Servicio, se relacionará con las entidades y prestadores acreditados.”.

b) Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:

i) Sustitúyese la expresión “SENAME” por “Servicio”.

ii) Sustitúyese la frase “sus colaboradores acreditados” por “las entidades y prestadores acreditados”.

iii) Sustitúyese la frase “niños, niñas y adolescentes” por “niños y niñas”¹³.

2) Modifícase el artículo 2 del siguiente modo:

a) Sustitúyese el inciso primero¹⁴ por el siguiente:

“Artículo 2.- La acción del Servicio y sus entidades y prestadores acreditados se sujetará a los principios que rigen al Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, al Servicio de Protección Especializada y especialmente a los siguientes principios:”.

b) Reemplázanse en el numeral 2) las expresiones “niño, niña o adolescente”, por “niño o niña”¹⁵.

3) Sustitúyese el artículo 3¹⁶ por el siguiente:

12 Inciso primero vigente:

Artículo 1°.- Las disposiciones de esta ley tienen por objeto establecer la forma y condiciones en que el Servicio Nacional de Menores, en adelante SENAME, subvencionará a sus colaboradores acreditados.

13 El inciso segundo quedaría con las siguientes adecuaciones:

Asimismo, determinan la forma en que el Servicio velará para que la acción desarrollada por las entidades y prestadores acreditados respete y promueva los derechos fundamentales de los niños y niñas y adolescentes sujetos de atención y se ajuste a lo dispuesto en esta ley y en las demás disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la labor que ellos desempeñan.

14 Inciso primero vigente:

Artículo 2°.- La acción del SENAME y sus colaboradores acreditados se sujetará a los siguientes principios:

15 Mera adecuación.

16 Artículo 3° vigente:

Artículo 3°.- El SENAME podrá subvencionar, conforme a las disposiciones de la presente ley, las actividades desarrolladas por los colaboradores acreditados relativas a las siguientes líneas de acción:

- 1) Oficinas de protección de los derechos del niño, niña y adolescente;
- 2) Centros Residenciales;
- 3) Programas, y
- 4) Diagnóstico.

Lo anterior, sin perjuicio de las facultades del SENAME para desarrollar estas líneas directamente, de conformidad a lo establecido en el artículo 3°, número 4, del decreto ley N° 2.465, de 1979, que fija el texto de su ley orgánica.

"Artículo 3.- El Servicio podrá subvencionar, conforme a las disposiciones de la presente ley, los programas de protección especializada realizados por las entidades o prestadores acreditados relativos a las siguientes líneas de acción:

- 1) Cuidado alternativo de tipo residencial o familiar.
- 2) Ambulatoria de reparación y restitución de derechos.
- 3) Adopción.

Los programas de las líneas de acción antes mencionados, deberán estar acreditados conforme a los estándares que fije la Subsecretaría de la Niñez.

Un Reglamento del Ministerio de Desarrollo Social, suscrito además por el Ministro de Hacienda, establecerá los programas de protección especializada que se desarrollarán en cada línea de acción, y todas las normas necesarias para la aplicación de los artículos 29 y 30 de esta ley."

4) Reemplázase el artículo 4¹⁷ por el siguiente:

"Artículo 4.- Para efectos de esta ley se entenderá por:

- 1.- Entidades y prestadores acreditados: Las personas naturales y las personas jurídicas sin fines de lucro y que tengan por objeto desarrollar los programas de protección especializada a que se refiere el artículo anterior, sean acreditadas como tales, por el Director Nacional del Servicio, en la forma y condiciones que establezca la ley y demás normativa.

Además, podrán acreditarse las instituciones públicas que ejecuten o entre cuyas funciones se encuentre desarrollar acciones relacionadas con las materias de que trata esta ley.

- 2.- Programas subvencionables: Serán objeto de subvención los programas de protección especializada de las líneas de acción a que se refiere el artículo 3.
- 3.- Unidad de Subvención de Protección Especializada (USPE): Es la unidad equivalente en dinero con la cual se expresan los pagos del Servicio a las entidades y prestadores acreditados."

5) Sustitúyese el artículo 5¹⁸ por el siguiente:

17 El artículo 4° vigente, por su extensión, se incluye en el **ANEXO I**.

18 Artículo 5° vigente:

Artículo 5°.- Para los efectos del pago de la subvención podrán ser sujetos de atención de los proyectos ejecutados por los colaboradores acreditados, dentro de las líneas de acción señaladas en el artículo 3° de la presente ley, los siguientes:

- 1) Los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos o en situación de exclusión social;
- 2) Los adolescentes inculcados de haber cometido una infracción a la ley penal, sujetos a una medida decretada por el tribunal competente o a una pena como consecuencia de haberla cometido, y
- 3) Los niños, niñas o adolescentes que no encontrándose en las situaciones previstas en los números anteriores, requieran de la acción del SENAME y sus colaboradores acreditados para la prevención de situaciones de vulneración de sus derechos y promoción de los mismos.

El SENAME podrá también subvencionar las actividades relacionadas con la atención a los padres, las personas que tengan el cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes, o a quienes les corresponda un rol protector de sus derechos cuando de ello dependa la prevención o superación de la situación que vulnera dichos derechos o el desarrollo del proceso de reinserción de los adolescentes infractores de ley penal.

“Artículo 5.- Para los efectos del pago de la subvención, podrán ser sujetos de atención de los programas de protección especializada ejecutados por las entidades o prestadores acreditados, dentro de las líneas de acción señaladas en el artículo 3 de la presente ley, los niños y niñas sujetos de protección especializada del Servicio, derivados por el órgano competente. El Servicio podrá proveer prestaciones a padres y/o madres y a quienes tengan el cuidado del niño o niña cuando sea indispensable para alcanzar los objetivos de la protección especializada, en las condiciones y modalidades establecidas en las leyes y en sus respectivos reglamentos.”.

6) Reemplázase el epígrafe del Título II¹⁹ por el siguiente: “De la acreditación”.

7) Modifícase el artículo 6 en el siguiente sentido:

a) Modifícase el inciso primero del siguiente modo:

- i) Sustitúyese la frase: “colaboradores las personas jurídicas” por: “entidades y prestadores las personas naturales o jurídicas”.
- ii) Elimínase la frase “para el desarrollo de la línea de acción de diagnóstico”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero:

“Además, las entidades y prestadores señalados en el inciso anterior, deberán cumplir con los estándares de acreditación que fije la Subsecretaría de la Niñez y las normas generales que dicte el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas, como asimismo, no estar afectos a las prohibiciones e inhabilidades que fije la ley.”.

c) Sustitúyese en el inciso segundo, que ha pasado a ser inciso tercero, la frase “colaboradores acreditados” por “entidades acreditadas”²⁰.

8) Suprímese el artículo 7²¹.

19 Epígrafe actual:
TÍTULO II De los colaboradores acreditados

20 El artículo 6° quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 6°.- Podrán ser acreditados como entidades y prestadores las personas naturales o jurídicas a que se refiere el artículo 4° N° 1), que dentro de sus finalidades contemplen el desarrollo de acciones acordes con los fines y objetivos de esta ley y las personas naturales que tengan idoneidad y título profesional ~~para el desarrollo de la línea de acción de diagnóstico~~:

Además, las entidades y prestadores señalados en el inciso anterior, deberán cumplir con los estándares de acreditación que fije la Subsecretaría de la Niñez y las normas generales que dicte el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas, como asimismo, no estar afectos a las prohibiciones e inhabilidades que fije la ley.

Las personas jurídicas reconocidas como entidades acreditadas, para efectos de percibir la subvención de que trata esta ley, deberán cumplir además con los requisitos señalados en la ley N° 19.862, que establece registros de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos.

21 Artículo 7°, que se deroga:

Artículo 7°.- No podrán ser reconocidos como colaboradores acreditados aquellas personas jurídicas que tengan como miembros de su directorio, representante legal, gerentes o administradores a:

- 1) Personas que hayan sido condenadas, estén procesadas o en contra de las cuales se haya formalizado investigación por crimen o simple delito que, por su naturaleza, ponga de manifiesto la inconveniencia de encomendarles la atención directa de niños, niñas o adolescentes, o de confiarles la administración de recursos económicos ajenos;

- 9) Reemplázase el artículo 8²² por el siguiente:

“Artículo 8.- La acreditación podrá solicitarse en cualquier momento, sin perjuicio de lo cual el Servicio realizará llamados públicos a presentar solicitudes, por lo menos una vez al año, de conformidad al reglamento.”.

- 10) Reemplázase el artículo 9²³ por el siguiente:

“Artículo 9.- El Director Nacional del Servicio podrá rechazar o revocar la acreditación cuando no se dé cumplimiento a las condiciones exigidas para su otorgamiento y de acuerdo a lo que establezca el reglamento.

En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios o en la normativa vigente por parte de las entidades y prestadores acreditados, se aplicarán las sanciones establecidas en dichos convenios y en la ley.”.

- 11) Sustitúyese en el artículo 10 la frase “reconocimiento como colaborador acreditado”, por “la acreditación”²⁴.

- 12) Modifícase el artículo 11 del siguiente modo:

- a) Reemplázase en su inciso primero la expresión “Los colaboradores” por “ Las entidades y prestadores”.
- b) Sustitúyese en su inciso segundo la expresión “los colaboradores”, por “las entidades y prestadores acreditados”²⁵.

-
- 2) Funcionarios públicos que ejerzan funciones de fiscalización o control sobre los colaboradores acreditados;
 - 3) Jueces, personal directivo y auxiliares de la administración de justicia de los juzgados de familia creados por la ley N° 19.968, y
 - 4) Integrantes de los consejos técnicos de los juzgados de familia a que se refiere la ley N° 19.968.

Las inhabilidades establecidas en los números precedentes se aplicarán asimismo a las personas naturales, según corresponda.

El reglamento establecerá la forma en que se acreditará el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior y la circunstancia de no encontrarse afecto a alguna de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en el presente artículo.

- 22 Artículo 8°, que se deroga:

Artículo 8°.- El reconocimiento como colaborador acreditado podrá solicitarse en cualquier momento, sin perjuicio de lo cual el SENAME realizará llamados públicos a presentar solicitudes, por lo menos una vez al año.

- 23 Artículo 9°, que se deroga:

Artículo 9°.- En caso de que, por causa sobreviniente, se produzca la pérdida de alguno de los requisitos señalados en el artículo 6° o se incurra en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas en el artículo 7°, el Director Nacional del SENAME revocará el reconocimiento, de acuerdo a los siguientes criterios:

- 1) Si se tratare de una persona jurídica, la revocación sólo procederá en caso de pérdida no subsanable de los requisitos señalados en el artículo 6°. Si se configurare alguna inhabilidad o incompatibilidad respecto de alguna de las personas a que se refiere el inciso primero del artículo 7°, se procederá conforme al número siguiente y sólo se podrá revocar el reconocimiento de la persona jurídica cuando la circunstancia sobreviniente afectare el normal funcionamiento de la institución, y
- 2) Si se tratare de una persona natural acreditada como colaborador, para la revocación del reconocimiento se atenderá a la circunstancia de concurrir una causal subsanable o no subsanable.

En ambos casos, se entenderá que no es subsanable aquella causal que habiéndose representado por el Servicio en forma escrita no hubiere sido superada en el plazo señalado para estos efectos.

- 24 El artículo 10 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 10.- La resolución que rechace o revoque la acreditación, podrá ser recurrida conforme a lo dispuesto en la ley N° 19.880.

- 25 Adecuación.

- 13) Reemplázase el artículo 12²⁶ por el siguiente:

“Artículo 12.- La entidad o prestador acreditado estará obligado a otorgar atención a todo niño o niña que sea sujeto de protección especializada del Servicio a requerimiento del órgano competente, siempre que se trate de una situación contemplada en el convenio y cuente con plazas disponibles. Con todo, si existiere un programa de protección especializada más apropiado para atender a lo solicitado, será deber de la entidad o prestador acreditado requerido proponer al Servicio esa alternativa.”.

- 14) Modifícase el artículo 13 del siguiente modo:

- a) Reemplázase la expresión “colaboradores acreditados” por “entidades y prestadores acreditados”.
- b) Reemplázase la expresión “SENAME” por “Servicio”²⁷.

- 15) Modifícase el artículo 14 del siguiente modo:

- a) Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:
 - i) Reemplázase la palabra “proyectos” por “programas de protección especializada”.
 - ii) Sustitúyese la frase “niños, niñas y adolescentes” por “niños o niñas”.
- c) Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:

“En los casos señalados en el inciso anterior, así como en aquellas situaciones que, no siendo constitutivas de delito, hagan necesaria una medida a favor del niño o niña, la entidad o prestador acreditado deberá realizar la solicitud respectiva al órgano competente.”²⁸.

- 16) Suprímense los párrafos 2° y 3°²⁹ del TÍTULO III.

²⁶ Artículo 12, que se deroga:

Artículo 12.- El colaborador acreditado estará obligado a otorgar atención a todo niño, niña o adolescente que lo solicite directamente o por medio de la persona encargada de su cuidado personal, a requerimiento del SENAME, del tribunal competente o de la oficina de protección de derechos respectiva, siempre que se trate de una situación para la cual sea competente, según el convenio, y cuente con plazas disponibles. Con todo, si existiere un programa o servicio más apropiado para atender al solicitado, será deber del colaborador requerido proponer al solicitante esa alternativa.

Lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable a los centros residenciales ni a los programas de reinserción para adolescentes infractores de ley penal, en los cuales el colaborador acreditado sólo atenderá a los niños, niñas o adolescentes previa resolución judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del presente Título.

²⁷ Adecuaciones.

²⁸ El artículo 14 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 14.- Los directores o responsables de los programas de protección especializada, y los profesionales que den atención directa a los niños o niñas ~~o adolescentes~~ en alguna de las líneas de acción señaladas por esta ley, que tengan conocimiento de una situación de vulneración a los derechos de alguno de ellos, que fuere constitutiva de delito, deberán denunciar de inmediato esta situación a la autoridad competente en materia criminal.

~~En los casos señalados en el inciso anterior, así como en aquellas situaciones que, no siendo constitutivas de delito, hagan necesaria una medida judicial a favor del niño, niña o adolescente, el colaborador acreditado deberá realizar la solicitud respectiva al tribunal competente.~~

En los casos señalados en el inciso anterior, así como en aquellas situaciones que, no siendo constitutivas de delito, hagan necesaria una medida a favor del niño o niña, la entidad o prestador acreditado deberá realizar la solicitud respectiva al órgano competente.

²⁹ Artículos 15 a 17; véase el **ANEXO II**

17) Elimínase el epígrafe del Párrafo 4°³⁰.

18) Suprímese el artículo 18³¹.

19) Sustitúyese el artículo 19³² por el siguiente:

“Artículo 19.- En los programas de la línea de acción de cuidado alternativo de tipo residencial o familiar sólo se podrán acoger a niños o niñas por disposición de la autoridad judicial.

Sin embargo, los programas señalados en el inciso anterior también podrán dispensar la atención de urgencia a los niños y niñas separados o privados de su medio familiar, quedando obligados a solicitar a la autoridad judicial al día siguiente hábil, que adopte una medida al respecto.”.

20) Modifícase el artículo 20 de la siguiente forma:

- a) Reemplázase la frase “Los colaboradores acreditados que administren una residencia”, por “Las entidades y prestadores acreditados que administren los programas de la línea de acción de cuidado alternativo de tipo residencial o familiar”.
- b) Reemplázase, la frase “niños, niñas y adolescentes”, por “niños y niñas”³³.

21) Reemplázase, en el artículo 21, la frase “El director de la residencia asumirá el cuidado personal y la dirección de la educación de los niños, niñas y adolescentes”, por “El Director de la residencia o quien tenga el cuidado legal del niño en el caso de la línea de acción de cuidado alternativo de tipo residencial o familiar, asumirá el cuidado personal y la dirección de la educación de los niños y niñas”³⁴.

30 Epígrafe que se suprime:
Párrafo 4° De los centros residenciales.

31 Artículo 18, que se deroga:
Artículo 18.- El ingreso a los centros de diagnóstico deberá realizarse previa resolución judicial. Con todo, cuando por razones de fuerza mayor un niño, niña o adolescente, ingrese al establecimiento, sin que exista tal medida judicial, los responsables de dicho centro asumirán como primera función, darles la debida protección a sus derechos y procurar por todos los medios reunirlos nuevamente, con sus padres o las personas encargadas legalmente de su cuidado personal. Con todo, si éstos han sido los causantes directos de la vulneración de los derechos del niño, niña o adolescente, y, en general, cuando no sea posible reunirlo con esas personas, se deberá informar en la primera audiencia al tribunal competente para que adopte una medida a su respecto.

32 Artículo 19, que se deroga:
Artículo 19.- En las residencias sólo se podrán acoger a niños, niñas o adolescentes por disposición de la autoridad judicial.
Sin embargo, las residencias también podrán dispensar a los niños, niñas y adolescentes separados o privados de su medio familiar la atención de urgencia cuando no se pueda recurrir a un centro de diagnóstico, quedando obligadas a solicitar a la autoridad judicial, al día siguiente hábil, que adopte una medida al respecto.

33 El artículo 20 quedaría con la siguiente redacción:
Artículo 20.- Las entidades y prestadores acreditados que administren los programas de la línea de acción de cuidado alternativo de tipo residencial o familiar deberán adoptar las medidas necesarias para el ejercicio del derecho de los niños o niñas ~~e-adolescentes~~ que acojan, a mantener relaciones personales y contacto directo y regular con sus padres y con otros parientes, salvo resolución judicial en contrario.

34 El artículo 21 quedaría con la siguiente redacción:
Artículo 21.- El Director de la residencia o quien tenga el cuidado legal del niño en el caso de la línea de acción de cuidado alternativo de tipo residencial o familiar, asumirá el cuidado personal y la dirección de la educación de los niños y niñas acogidos en ella, respetando las limitaciones que la ley o la autoridad judicial impongan a sus facultades, en favor de los derechos y de la autonomía de ellos, así como de las facultades que conserven sus padres o las otras personas que la ley disponga.

- 22) Suprímese el párrafo 5°³⁵ del Título III, pasando el Párrafo 6° a ser Párrafo 2°.
- 23) Sustitúyese el artículo 2436 por el siguiente:

“Artículo 24.- Un mismo niño o niña puede ser simultáneamente destinatario de más de un programa de protección especializada subvencionado por el Servicio, ejecutado por una o más entidad o prestador acreditado.”.
- 24) Susutitúyese en el epígrafe del Título IV las palabras “las evaluaciones” por “la supervisión”³⁷.
- 25) Modifícase el artículo 25 del siguiente modo:
 - a) Reemplázase, en los tres incisos del artículo, la expresión “SENAME” por “Servicio”, cada vez que aparece.
 - b) Reemplázase, en el inciso segundo la expresión “colaboradores acreditados” por “entidades o prestadores acreditados”.
 - c) Reemplázase, en el inciso tercero, la frase “a que se refiere la letra f) del 3.2) del artículo 4°” por “en los casos que establezca el reglamento”.
 - d) Reemplázase, en el numeral 1) el vocablo “colaboradores” por “entidades o prestadores acreditados”.
 - e) Reemplázase, en el numeral 2), la frase “niñas, niños y adolescentes usuarios de algún proyecto” por “niños y niñas usuarios de algún proyecto”³⁸.
- 26) Modifícase el artículo 26³⁹ del siguiente modo:

35 Párrafo 5, que se suprime:

Párrafo 5 Del diagnóstico

Artículo 22.- Los colaboradores acreditados que ejecuten la línea de diagnóstico deberán elaborar los respectivos informes requeridos por el tribunal u otro organismo competente, velando por el cumplimiento de los plazos y el resguardo de la información de carácter reservado de acuerdo a la legislación vigente.

Artículo 23.- El diagnóstico acerca de un niño, niña o adolescente acogido en un centro residencial administrado por un colaborador acreditado será realizado, preferentemente, por un equipo de diagnóstico que no sea administrado por ese mismo colaborador.

36 Artículo 24, que se deroga:

Artículo 24.- Un mismo niño, niña o adolescente puede ser simultáneamente destinatario de más de una línea de acción subvencionada por el SENAME, ejecutada por distintos o un mismo colaborador acreditado si se dan las condiciones.

37 El epígrafe quedaría con la siguiente redacción:

TÍTULO IV Del financiamiento y la supervisión.

38 El artículo 25 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 25.- Para la transferencia de la subvención, el Servicio llamará a concurso de proyectos relativos a las diversas líneas de acción reguladas en la presente ley. Cada concurso se regirá por las bases administrativas y técnicas que para estos efectos elabore el Servicio.

Una vez seleccionados dichos proyectos, el Servicio celebrará con los respectivos entidades o prestadores acreditados un convenio conforme al artículo siguiente.

Estarán excluidos del llamado a concurso los proyectos de emergencia en los casos que establezca el reglamento. Asimismo, mediante resolución fundada, podrán exceptuarse de la licitación, quedando facultado el Servicio para establecer un convenio en forma directa, en los siguientes casos:

- 1) Cuando habiéndose realizado el respectivo llamado a concurso, éste hubiere sido declarado desierto por no existir entidades o prestadores acreditados.
- 2) Cuando se tratare de asegurar la continuidad de la atención a niñas y niños ~~y adolescentes~~ usuarios de algún proyecto que haya debido terminarse anticipadamente.

39 Artículo 26 (encabezamiento):

Artículo 26.- Los convenios que sean celebrados con los colaboradores acreditados deberán estipular, a lo menos:

- a) Reemplázase, en el encabezado del inciso primero, la frase “los colaboradores acreditados” por “las entidades y prestadores acreditados”⁴⁰.
- b) Reemplázase el numeral 1)⁴¹ por el siguiente “1) Los programas de las líneas de acción subvencionadas;”.
- c) Reemplázase, en el numeral 2), la frase “SENAME y el colaborador”, por “Servicio y la entidad o prestador”⁴².
- d) Reemplázase, en el numeral 2), la palabra “evaluar” por “supervisar”⁴³.
- e) Reemplázase, en el numeral 6), la frase “El proyecto presentado por el colaborador”, por “El programa y sus prestaciones presentados por la entidad o prestador acreditado”⁴⁴.

27) Modifícase el artículo 27 en el siguiente sentido:

- a) Sustitúyese, en el inciso primero, la expresión “máximo de:” por “máximo de 5 años para los programas de las líneas de acción del artículo 3.”.
- b) Suprímense los numerales 1) y 2) del inciso primero.
- c) Reemplázase, en los incisos segundo, tercero y final, la expresión “SENAME” por “Servicio”, cada vez que aparece.
- d) Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:
 - i) Reemplázase en la palabra “evaluados” por “supervisados”.
 - ii) Reemplázase la frase “Servicio Nacional de Menores” por “Servicio”.
 - iii) Reemplázase la frase “los colaboradores acreditados” por “las entidades y prestadores acreditados”.
- e) Modifícase el inciso cuarto en el siguiente sentido:
 - i) Sustitúyese la frase “centros residenciales”, por la frase “programas de la línea de acción de cuidado alternativo de tipo residencial o familiar”.
 - ii) Sustitúyese la frase “los diagnósticos, OPD y”, por “los programas de la línea de acción ambulatorios”.
 - iii) Reemplázase la frase “el colaborador acreditado”, por “la entidad o prestador acreditado”.
 - vi) Reemplázase la palabra “evaluaciones” por “supervisiones”.

40 Adecuación.

41 Número 1) del artículo 26, vigente:
1) La línea de acción subvencionada;

42 Adecuación.

43 El N°2 del artículo 26 quedaría con la siguiente redacción:
N°2) Los objetivos específicos y los resultados esperados, así como los mecanismos que el SENAME y el colaborador acreditado emplearán para supervisar su cumplimiento;

44 Adecuación.

- f) Reemplázase, en el inciso final, la frase “centros residenciales, el SENAME” por “programas de la línea de acción de cuidado alternativo de tipo residencial o familiar, el Servicio”⁴⁵.

28) Modifícase el artículo 28 del siguiente modo:

- a) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “Los organismos acreditados”, por “Las entidades o prestadores acreditados”;
- b) Intercálase el siguiente inciso tercero, pasando el actual inciso tercero a ser inciso final:
- “Un reglamento dictado por el Ministerio de Desarrollo Social, y suscrito por el Ministro de Hacienda, establecerá el o los porcentajes a aplicar para los efectos del inciso primero, el cual podrá ser diferenciado y estará sujeto al límite máximo señalado en dicho inciso. Además, regulará un sistema de rendición de cuentas al Servicio, por parte de las entidades o prestadores acreditados.”.
- c) Reemplázase, en el inciso final, la expresión “SENAME” por “Servicio”⁴⁶.

29) Modifícase el artículo 29 del siguiente modo:

- a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “SENAME” por “Servicio”.
- b) Reemplázase en el numeral 1) la frase “niños, niñas y adolescentes” por “niños o niñas”.
- c) Intercálase en el inciso final entre el vocablo “reglamento” y término “especificará” la frase: “del artículo 3”⁴⁷.

45 El artículo 27 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 27.- Sin perjuicio de lo establecido en las normas de administración financiera del Estado, los convenios podrán durar un plazo máximo de 5 años para los programas de las líneas de acción del artículo 3:

1) 3 años para OPD y diagnósticos, y

2) 5 años para centros residenciales y programas.

Los proyectos con un plazo de duración superior a un año, serán supervisados anualmente por el Servicio ~~Nacional de Menores~~. Asimismo, el Servicio solicitará a las entidades y prestadores acreditados un plan de trabajo para el correspondiente período.

El Servicio podrá prorrogar los convenios, sin necesidad de un nuevo llamado a concurso, si las evaluaciones arrojan resultados positivos. El Servicio, con una anticipación no inferior a 60 días a la expiración del convenio, deberá formular los reparos pertinentes a la ejecución del proyecto, si no lo hiciere, se tendrá por renovado el convenio por un período idéntico al pactado en el convenio vigente.

La facultad de prorrogar la vigencia de los convenios podrá ejercerse hasta por dos veces respecto de los convenios relativos a programas de la línea de acción de cuidado alternativo de tipo residencial o familiar, y por una sola vez, respecto de los programas de la línea de acción ambulatorios, tras lo cual el Servicio deberá realizar un nuevo llamado a concurso. A dicho proceso podrá postular la entidad o prestador acreditado que hubiere ejecutado el proyecto respectivo, debiendo considerarse su trayectoria y desempeño a cargo de éste como un antecedente para la supervisión del nuevo proyecto.

En el caso de los programas de la línea de acción de cuidado alternativo de tipo residencial o familiar, el Servicio, [el Servicio] podrá ejercer la facultad de prórroga de los convenios modificando las plazas inicialmente acordadas, atendiendo a las necesidades reales de cobertura de atención.

46 El artículo 28 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 28.- Las entidades o prestadores acreditados que ejecuten más de un proyecto podrán administrarlos centralizadamente utilizando hasta un monto máximo del 10% que perciban por concepto de subvención.

Estos fondos sólo se podrán destinar a gastos de administración que se efectúen para el cumplimiento de los objetivos de los proyectos.

Un reglamento dictado por el Ministerio de Desarrollo Social, y suscrito por el Ministro de Hacienda, establecerá el o los porcentajes a aplicar para los efectos del inciso primero, el cual podrá ser diferenciado y estará sujeto al límite máximo señalado en dicho inciso. Además, regulará un sistema de rendición de cuentas al Servicio, por parte de las entidades o prestadores acreditados.

La respectiva institución deberá comunicar al Servicio de su decisión de acogerse a esta modalidad de administración.

47 Adecuaciones.

30) Reemplázase el artículo 30⁴⁸ por el siguiente:

“Artículo 30.- La subvención ofrecida por el Servicio por cada línea de acción, se determinará de acuerdo a lo señalado en el artículo anterior y deberá respetar los siguientes rangos expresados en unidades de subvención USPE:

Línea de acción	Forma de Pago	Valor base
Cuidado alternativo de tipo residencial o familiar	Tipo residencial: sistema combinado. Por plaza convenida a todo evento en la parte fija de los costos, la que no podrá exceder del 30% del valor unitario y por niño atendido, en la parte variable de los mismos.	12,1 a 26 USPE mensuales
	Tipo familias de acogida: por niño o niña atendido	6,5 a 9 USPE mensuales
Ambulatoria de reparación y restitución de derechos	Tipo protección en general: por población atendida con valor unitario	0,5 a 8,99 USPE mensuales
	Tipo fortalecimiento familiar: sistema combinado. Por niño o niña atendido a todo evento y un adicional por niño egresado favorablemente	3 USPE mensuales a todo evento y 10 USPE por niño o niña egresado favorablemente
	Tipo protección especializada: por niño o niña atendido	9 a 15 USPE mensuales
Adopción	Tipo apoyo y orientación a la familia de origen: por población atendida con valor unitario	2,15 USPE mensual
	Tipo recepción y cuidado del niño: por población atendida con valor unitario	2,15 USPE mensual
	Tipo evaluación técnica de los solicitantes y preparación para la adopción: por población atendida con valor unitario	2,15 USPE mensual

Adicionalmente, se podrán destinar hasta 2.000 USPE por proyecto de emergencia en cualquier de las tres líneas de acción.”.

31) Modifícase el artículo 31 del siguiente modo:

- Reemplázase la expresión “SENAME” por “Servicio”.
- Reemplázase la expresión “los colaboradores acreditados” por “las entidades o prestadores acreditados”⁴⁹.

32) Modifícase el artículo 32 del siguiente modo:

- Modifícase el inciso primero en el siguiente sentido:

48 El artículo 30, que se deroga, por su extensión se incluye en el **ANEXO III**.

49 Adecuaciones.

- i) Reemplázase la expresión “Unidad de Subvención”, por la expresión “Unidad de Subvención de Protección Especializada”.
 - ii) Reemplázase la expresión “del SENAME”, por la palabra “Servicio”.
 - b) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “USS” por “USPE”⁵⁰⁵¹.
- 33) Intercálase en el artículo 33 entre la palabra “reglamento” y el vocablo “especificará”, la frase “del artículo 3”.
- 34) Modifícase el artículo 34 del siguiente modo:
- a) Modifícase el inciso primero del siguiente modo:
 - i) Reemplázase la expresión “SENAME” por “Servicio”.
 - ii) Intercálase a continuación del vocablo “programas” la frase “de la línea de acción del numeral 2) del artículo 3°,”.
 - iii) Sustitúyese la frase “los colaboradores acreditados” por “las entidades o prestadores acreditados”.
 - b) Modifícase el inciso segundo en el siguiente sentido:
 - i) Sustitúyese la frase “los colaboradores” por “las entidades o prestadores acreditados”.
 - ii) Sustitúyese la frase “del colaborador” por “de la entidad o prestador”.
 - c) Elimínase el inciso tercero⁵².
- 35) Sustitúyese en el artículo 35, la frase “los colaboradores acreditados del SENAME”, por “las entidades o prestadores acreditados”⁵³.
- 36) Sustitúyese el epígrafe del Párrafo 2°⁵⁴ por “De la supervisión”.

50 Unidad de Subvención de Protección Especializada.

51 Adecuaciones.

52 El artículo 34 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 34.- El Servicio podrá destinar hasta el 2% de los recursos con que cuente anualmente en su presupuesto de programas de la línea de acción del numeral 2) del artículo 3°, a premiar con un bono de desempeño, por la calidad de la atención y los resultados alcanzados, a las entidades o prestadores acreditados que ejecuten la Línea de Acción Programas.

El bono de desempeño se adjudicará y pagará a los colaboradores anualmente y deberá ser destinado a los fines propios de la entidad o prestador. El reglamento determinará la forma en que procederá su asignación.

~~Estarán excluidos de este beneficio los programas a que se refiere el artículo 16 de la presente ley.~~

53 Adecuación.

54 Epígrafe del párrafo 2 actual:
Párrafo 2 De las evaluaciones

- 37) Modifícase⁵⁵ el artículo 36 del siguiente modo:
- a) Reemplázase en el encabezado, la palabra “evaluación” por la palabra “supervisión”.
 - b) Intercálase en el numeral 1, entre el vocablo “objetivos” y el punto y coma, la frase: “y de los estándares de acreditación y de las normas de carácter general”.
 - c) Suprímese el numeral 4.
 - d) Reemplázase, en el inciso segundo, la expresión “los colaboradores acreditados” por “las entidades o prestadores acreditados”.
 - e) Reemplázase, en el inciso segundo, la palabra “evaluación” por “supervisión”.
 - f) Reemplázase, en el inciso final, la expresión “SENAME” por “Servicio”.
 - g) Reemplázase, en el inciso final, la palabra “evaluación” por “supervisión”.
- 38) Modifícase el artículo 37⁵⁶ del siguiente modo:
- a) Reemplázase, en ambos incisos, la expresión “SENAME”, por “Servicio”, cada vez que aparece.
 - b) Agrégase, en el inciso primero, a continuación del vocablo “convenios” la siguiente frase: “, por resolución fundada”.
 - c) Reemplázase, en el inciso primero, la frase “niños, niñas o adolescentes”, por “niños o niñas”.
 - d) Reemplázase, en el inciso final, la frase “los colaboradores”, por “las entidades o prestadores acreditados”;
- 39) Reemplázase en el artículo 39 la frase “los colaboradores acreditados” por “las entidades y prestadores acreditados”.
- 40) Reemplázase en el artículo 40 la expresión “SENAME” por “Servicio”, cada vez que aparece.
- 41) Reemplázase en el artículo 45, la expresión “SENAME” por “Servicio”.

55 Adecuaciones.

56 Adecuaciones.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo Primero Transitorio.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social y suscritos por los Ministros de Justicia y Derechos Humanos y de Hacienda, establezca las normas necesarias para regular las siguientes materias:

Fijar las plantas de personal del Servicio Nacional de Protección Especializada de niños y niñas y dictar todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de ellas. En especial, podrá determinar los grados y niveles de la Escala Única de Sueldos que se asignen a dichas plantas; el número de cargos para cada grado y planta; los requisitos para el desempeño de los mismos; sus denominaciones y los niveles jerárquicos, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza, de carrera, aquellos para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8° del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo y los niveles jerárquicos para la aplicación del Título VI de la ley N° 19.882. Además, establecerá las normas para el encasillamiento en las plantas.

Asimismo, podrá determinar las normas transitorias para la aplicación de las remuneraciones variables, tales como, la aplicación de la asignación de modernización de la ley N° 19.553.

Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de funcionarios titulares de planta y a contrata, desde el Servicio Nacional de Menores al Servicio Nacional de Protección Especializada de niños y niñas y al Ministerio de Desarrollo Social. En el respectivo decreto con fuerza de ley que fije la planta de personal, se determinará la forma en que se realizará el traspaso y el número de funcionarios o funcionarias que serán traspasados por estamento y calidad jurídica, pudiéndose establecer, además, el plazo en que se llevará a cabo este proceso. La individualización del personal traspasado se realizará a través de decretos expedidos bajo la fórmula "Por orden del Presidente o Presidenta de la República", por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y suscrito por el Ministro de Desarrollo Social. El traspaso del personal titular de planta y a contrata se efectuará en la misma calidad jurídica y grado que tenía a la fecha del traspaso.

A contar de la fecha del traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de funcionarios traspasados. Conjuntamente con el traspaso de personal se transferirán los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. Los funcionarios que sean traspasados desde el Servicio Nacional de Menores al Ministerio de Desarrollo Social, también traspasarán el cargo que sirven y aumentará en el mismo número del traspaso la dotación máxima del personal de dicho Ministerio.

Determinar la fecha de entrada en vigencia del articulado permanente de esta ley y de las modificaciones a la ley N° 20.032, de las plantas que fije, del traspaso y del encasillamiento que se practique y de la iniciación de actividades del Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas. Igualmente, fijar la dotación máxima de personal del Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas, la cual no estará afecta a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Además, podrá determinar la fecha de supresión del Servicio Nacional de Menores.

El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al que afecte:

- a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral de los funcionarios titulares de planta. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.
 - b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales de los funcionarios titulares de planta. Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma impositibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado.
 - c) Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.
- 4) Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de esta facultad no serán exigibles para efectos del encasillamiento respecto de los funcionarios titulares y a contrata en servicio a la fecha de entrada en vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley. Asimismo, a los funcionarios a contrata en servicio a la fecha de vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley, y a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes.
 - 5) Podrá disponer el traspaso, en lo que corresponda, de los bienes que determine, desde el Servicio Nacional de Menores al Servicio de Protección Especializada de Niños y Niñas.

Artículo segundo transitorio.- El Presidente de la República, por decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto del Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas y transferirá a éste los fondos del Servicio Nacional de Menores necesarios para que cumpla sus funciones, pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar los capítulos, programas, asignaciones, ítems y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Artículo tercero transitorio.- Los colaboradores acreditados que, a la fecha de publicación de esta ley, estén reconocidos como tales por el Servicio Nacional de Menores no necesitarán acreditarse conforme a la presente ley mientras estén vigentes los convenios suscritos con dicha institución, sólo para efectos de dichos instrumentos. En estos casos continuarán rigiéndose por la Ley N°20.032 vigente con anterioridad a la entrada en vigor a las modificaciones a la misma según lo dispuesto en el artículo primero transitorio.

Los convenios que se encuentren vigentes antes de la fecha de entrada en funcionamiento del Servicio, entre los colaboradores acreditados y el Servicio Nacional de Menores, continuarán rigiéndose por las normas aplicables a la época de su celebración.

Artículo cuarto transitorio.- El Presidente de la República, sin sujetarse a lo dispuesto en el título VI de la Ley N° 19.882, nombrará al primer Director Nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas, quien asumirá de inmediato y en tanto se efectúan los procesos de selección pertinentes que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública.

Mientras no se fije la asignación de alta dirección pública para el cargo señalado en el inciso anterior, al Director Nacional le corresponderá la asignación de dirección superior establecida para el Director Nacional del Servicio Nacional de Menores, conforme al artículo único del decreto con fuerza de ley N°8, de 1990, del Ministerio de Justicia, que adecúa las plantas y escalafones del Servicio Nacional de Menores, al artículo 5° de la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Artículo quinto transitorio.- El Servicio Nacional de Menores o su sucesor legal, dentro del plazo de dos años contados desde la publicación de la presente ley deberá evaluar las líneas de acción establecidas en el artículo 30 de la ley N° 20.032 vigentes a la fecha de la referida publicación, que resulten pertinentes.

Artículo sexto transitorio.- El Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas continuará ejerciendo las funciones y atribuciones que correspondan al Servicio Nacional de Menores respecto de aquellas materias relativas a la prevención y promoción de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes hasta que se cree el Sistema de Protección Administrativa. Las líneas de acción contempladas en el artículo 30 de la ley N° 20.032, sobre Oficina de Protección de Derechos del Niño, Niña o Adolescente; Diagnósticos; Programa de Prevención; y, Programas de Promoción, se mantendrán vigentes y continuarán rigiéndose por las normas aplicables a la época antes de la entrada en vigor de las modificaciones introducidas a la ley N°20.032.

Artículo séptimo transitorio.- Los reglamentos a que alude esta ley podrán dictarse a contar de la publicación de esta normativa en el diario oficial.

Artículo octavo transitorio.- El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley, en su primer año presupuestario de vigencia, se financiará con cargo al presupuesto vigente del Servicio Nacional de Menores. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con tales recursos. Para los años posteriores el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de Presupuestos del Sector Público.

ANEXO I

Artículo 4°, que se deroga;

Artículo 4°.- Para efectos de esta ley, se entenderá por:

- 1) **Colaboradores acreditados:** las personas jurídicas sin fines de lucro que, con el objeto de desarrollar las acciones a que se refiere el artículo anterior, sean reconocidas como tales por resolución del Director Nacional del SENAME, en la forma y condiciones exigidas por esta ley y su reglamento.

Las personas naturales podrán ser reconocidas como colaboradores acreditados, para el solo efecto de desarrollar la línea de acción de diagnóstico, en conformidad con el procedimiento dispuesto en el inciso anterior.

Las instituciones públicas que ejecuten o entre cuyas funciones se encuentre desarrollar acciones relacionadas con las materias de que trata esta ley, no requerirán de dicho reconocimiento;

- 2) **Registro de colaboradores acreditados y proyectos:** el sistema de información acerca de la red de colaboradores acreditados del SENAME que contendrá los antecedentes a que se refiere el artículo 4° de la ley N° 19.862 y su reglamento y adicionalmente los resultados obtenidos por cada proyecto en la evaluación de desempeño.

En este caso, el registro será extensivo, en lo pertinente, a las personas naturales reconocidas como colaboradores acreditados, conforme a la presente ley;

- 3) **Líneas de acción subvencionables:** aquellas modalidades de atención señaladas en el artículo 3° de la presente ley. En particular se entenderá por cada una de ellas lo siguiente:

- 3.1) **Oficinas de protección de los derechos del niño, niña o adolescente (en adelante OPD):** instancias de atención ambulatoria de carácter local, destinadas a realizar acciones encaminadas a otorgar protección integral de los derechos de los niños, niñas o adolescentes, a contribuir a la generación de las condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento y al respeto de los derechos de la infancia.

- 3.2) **Programas:** un conjunto de actividades, susceptibles de ser agrupadas según criterios técnicos. Existirán, a lo menos, los siguientes programas:

- a) **Programa de Protección de Derechos:** destinado a ofrecer al niño, niña o adolescente la atención ambulatoria necesaria para la adecuada protección, reparación o restitución de sus derechos. En los casos en que la intervención técnica lo amerite, esta línea podrá desarrollarse conjuntamente con la línea residencial, para lo cual el colaborador acreditado podrá presentar un solo proyecto al respectivo llamado a licitación.

Para los efectos de lo dispuesto en el Título IV de la presente ley, dentro de este programa, se distinguirá:

- a.1) **Programa de protección en general:** destinado a la protección, reparación o restitución de los derechos del niño, niña o adolescente frente a situaciones de vulneración de los mismos que por su entidad no requieran de una intervención especializada.
- a.2) **Programa de protección especializado:** destinado a otorgar intervención reparatoria especializada frente a situaciones de graves vulneraciones de derechos, tales como: situación de calle, consumo abusivo de drogas, maltrato infantil grave, explotación sexual comercial infantil, u otras problemáticas que atenten gravemente contra el normal desarrollo del niño, niña o adolescente.
- a.3) **Fortalecimiento familiar,** aquéllos destinados a afianzar la capacidad de los padres o de quienes puedan asumir responsablemente el cuidado personal del niño, niña o adolescente que se encuentre en un centro residencial para ejercer directamente dicho cuidado, propiciando su pronto egreso y su reinserción familiar.
- b) **Programa de Reinserción para Adolescentes Infractores a la Ley Penal:** dirigido a ejecutar las acciones que la ley encomiende al SENAME respecto a la responsabilidad de un adolescente como consecuencia de la comisión de una infracción a la ley penal.

Para los efectos de lo dispuesto en el Título IV de la presente ley, dentro de este programa se distinguirán el de reinserción para adolescentes infractores a la ley penal en general y el programa de libertad asistida.

- c) **Programa de Prevención:** tendiente a prevenir situaciones de vulneración a los derechos del niño, niña o adolescente que afecten su integración familiar, escolar y comunitaria.
- d) **Programa de Promoción:** destinado a promover los derechos del niño, niña o adolescente, en alguna de las formas señaladas por el artículo 16.

- e) **Programa de Familias de Acogida:** dirigido a proporcionar al niño, niña o adolescente vulnerado en sus derechos un medio familiar donde residir, mediante familias de acogida.
 - f) **Programa de Emergencia:** tendiente a apoyar a los colaboradores acreditados frente a situaciones de emergencia o catástrofe que pudieran afectar la normal atención de los niños, niñas y adolescentes.
- 3.3) **Centros Residenciales:** aquéllos destinados a la atención de los niños, niñas y adolescentes privados o separados de su medio familiar. Se clasificarán en centros de diagnóstico y residencias:
- a) **Centros de Diagnóstico:** aquéllos destinados a proporcionar la atención transitoria y urgente de aquellos niños, niñas y adolescentes, que requieran diagnóstico o ser separados de su medio familiar mientras se adopta una medida de protección a su favor, proporcionando alojamiento, alimentación, abrigo, apoyo afectivo y psicológico y los demás cuidados que éstos requieran.
 - b) **Residencias:** aquéllas destinadas a proporcionar, de forma estable, a los niños, niñas y adolescentes separados de su medio familiar, alojamiento, alimentación, abrigo, recreación, estimulación precoz, apoyo afectivo y psicológico, asegurando su acceso a la educación, salud y a los demás servicios que sean necesarios para su bienestar y desarrollo.
- 3.4) **Diagnóstico:** la labor ambulatoria de asesoría técnica en el ámbito psicosocial u otros análogos a la autoridad judicial competente u otras instancias que lo soliciten, y
- 4) **Unidad de subvención SENAME (USS):** la unidad equivalente en dinero con la cual se expresan los aportes del SENAME a los colaboradores acreditados.

ANEXO II

Párrafo 2° del Título III, párrafo que se deroga

Párrafo 2°

De las oficinas de protección de derechos del niño, niña o adolescente

Artículo 15.- Corresponderá, especialmente, a las oficinas de protección de derechos del niño, niña o adolescente:

- a) Facilitar al niño, niña o adolescente, el acceso efectivo a los programas, servicios y recursos disponibles en la comunidad, fortaleciendo el trabajo en redes y las acciones colaborativas de actores públicos y privados;
- b) Ofrecer directamente la protección especial que sea necesaria, cuando la derivación a un programa no sea posible o cuando dicha derivación parezca innecesaria por tratarse de una situación que admita una solución relativamente rápida con los recursos de la propia oficina, y

- c) Promover el fortalecimiento de las competencias parentales que corresponden a las familias, privilegiando aquellas acciones destinadas a evitar la separación del niño, niña o adolescente de su familia o de las personas encargadas de su cuidado personal

Párrafo 3º (se deroga)

DE LOS PROGRAMAS

Artículo 16.- Los programas de promoción de los derechos del niño, niña o adolescente se dirigirán, en especial, a alguno de los siguientes objetivos:

- 1) La formación y capacitación en materias relacionadas con el respeto y ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, dirigidas a éstos y a las personas que tengan trato directo con ellos;
- 2) La difusión de los mismos derechos y de la situación de los niños, niñas y adolescentes,
- 3) Monitorear, evaluar y diseñar programas y proyectos por medio de estudios o investigaciones.

Artículo 17.- Los programas de reinserción para infractores a la ley penal tendrán por objeto la responsabilización de los adolescentes por sus propias conductas, el resguardo de su inserción social y familiar y el respeto por los derechos y libertades de las demás personas. Para el cumplimiento de estos objetivos se contará dentro de esta línea de acción con modalidades de mayor o menor nivel de especialización considerando la complejidad de la problemática que se pretende abordar.

En estos programas se deberán respetar todos aquellos derechos de los y las adolescentes, que no se vean restringidos por la naturaleza de la medida decretada por el juez.

Párrafo 5

Del diagnóstico (se deroga)

Artículo 22.- Los colaboradores acreditados que ejecuten la línea de diagnóstico deberán elaborar los respectivos informes requeridos por el tribunal u otro organismo competente, velando por el cumplimiento de los plazos y el resguardo de la información de carácter reservado de acuerdo a la legislación vigente.

Artículo 23.- El diagnóstico acerca de un niño, niña o adolescente acogido en un centro residencial administrado por un colaborador acreditado será realizado, preferentemente, por un equipo de diagnóstico que no sea administrado por ese mismo colaborador.

ANEXO III

Artículo 30 (que se deroga):

Artículo 30.- La subvención ofrecida por el SENAME por cada línea de acción, se determinará de acuerdo a lo señalado en el artículo anterior y deberá respetar los siguientes rangos, expresados en unidades de subvención SENAME:

LÍNEA DE ACCIÓN	FORMA DE PAGO	VALOR BASE
1) Oficinas de protección de derechos del niño , niña o adolescente	Por población convenida con valor unitario	0,083 a 0,12 US\$ mensuales
2) Diagnósticos	Por servicio prestado.	8 a 10 US\$
3) Centros Residenciales	Sistema Combinado: por plaza convenida, a todo evento en la parte fija de los costos, la que no podrá exceder del 30% del valor unitario y por niño atendido, en la parte variable de los mismos.	8,5 a 15 US\$ mensuales
4) Programas		
a) Programa de prevención	Por poblaci3n atendida con valor unitario.	3 a 5 US\$ mensuales
b) Programa de fortalecimiento familiar	Por sistema combinado. Por niño atendido a todo evento y un adicional por niño egresado favorablemente.	3 US\$ mensuales a todo evento y 10 US\$ por niño egresado favorablemente
c) Programa de promoción	Por proyecto	-Hasta 200US\$ por programa a nivel local -Hasta 2.000 US\$ por programa a nivel regional -Hasta 20.000 US\$ por programa a nivel nacional
d) Programa de medidas de reinserci3n para infractores de la ley penal en general	Por niño atendido	Valor base a determinar en el rango entre 0,5 y 7,99 US\$ mensuales
e) Programa de libertad asistida	Por niño atendido	8 a 12 US\$ mensuales
f) Programa de protecci3n en general	Por poblaci3n atendida con valor unitario	Valor base a determinar en el rango entre 0,5 a 8,99 US\$ mensuales
g) Programa de protecci3n especializados	Por niño atendido	9 a 15 US\$ mensuales
h) Programa de familias de acogida	Por niño atendido	6,5 a 9 US\$ mensuales
i) Programa de emergencia	Por proyecto	Hasta 2.000 US\$